La ejecución en España de sentencias estadounidenses adoptadas al amparo del título III de la Ley Helms Burton

Elisa Torralba Mendiola

Profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid
Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

La Ley Helms Burton otorga a los ciudadanos estadounidenses el derecho a demandar ante los tribunales de los Estados Unidos a las personas físicas o jurídicas extranjeras que hagan negocios con el Gobierno cubano relacionados con bienes sobre los que en el momento de la Revolución cubana tuvieran derechos ciudadanos estadounidenses (incluidos los que adquirieran tal condición tras la Revolución). La ejecución en España de las sentencias estadounidenses dictadas al amparo de esa ley se enfrenta, al menos en un buen número de casos, a la prohibición impuesta por el Reglamento 2271/96.

1. Antecedentes

Desde el pasado 2 de mayo está en vigor, por primera vez, el título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996 (Ley Helms Burton), que otorga a los ciudadanos estadounidenses el derecho a demandar ante los tribunales de los Estados Unidos a las personas físicas o jurídicas extranjeras que hagan negocios con el Gobierno cubano relacionados con bienes sobre los que en el momento de la Revolución cubana tuvieran derechos ciudadanos estadounidenses (incluidos los que adquirieran tal condición tras la Revolución).

La promulgación de la Ley Helms Burton y la previsión de su aplicación extraterritorial propició en su momento que la Unión Europea denunciara a los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio y que otros Estados tomaran medidas destinadas a proteger los

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

intereses de sus nacionales. Entre estas medidas cabe destacar la adopción por parte de la Unión Europea del Reglamento 2271/96, del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella. Esta norma pretende proteger de los efectos de la aplicación extraterritorial de ciertas leyes —entre ellas, la Ley Helms Burton— cuando dicha aplicación afecte a los intereses de las personas mencionadas en su artículo 11 que se dediquen al comercio internacional o al movimiento de capitales y a actividades comerciales afines entre la comunidad y terceros países.

2. Las previsiones del reglamento

De acuerdo con el citado artículo 11, el reglamento se aplica «1) a toda persona física residente en la Comunidad [Europea] y nacional de un Estado miembro; 2) a toda persona constituida en sociedad en la Comunidad; 3) a toda persona física o jurídica contemplada en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n.º 4055/86; 4) a cualquier otra persona física residente en la Comunidad, a menos que se encuentre en el país del que es nacional; 5) a cualquier otra persona física que se encuentre en la Comunidad, incluidas sus aguas territoriales y el espacio aéreo, y en toda aeronave o buque sujetos a la jurisdicción o control de un Estado miembro, que actúen profesionalmente».

La referencia del apartado 2 a las personas constituidas en sociedad en la Comunidad Europea plantea la cuestión de si el reglamento sólo se aplica a éstas o si se extiende también a las sociedades extraeuropeas integrantes del mismo grupo societario que la constituida en la Unión Europea. El artículo 2 del reglamento parece abogar por esta segunda lectura cuando se refiere a la situación en que los intereses económicos o financieros de cualquier persona de las indicadas en el artículo 11 se vean afectados «directa o indirectamente» por las leyes cuya aplicación se pretende evitar. En el mismo sentido se lee la referencia del artículo 5 a las filiales o intermediarios de las personas mencionadas en el artículo 11. Incluso si no se aceptara esa lectura, desde una perspectiva estrictamente española cabría denegar la eficacia de las decisiones tomadas por un tribunal extranjero en aplicación de esas normas de alcance extraterritorial y que pretendieran reconocerse o ejecutarse en España.

Entre las medidas que el reglamento adopta para salvaguardar los intereses económicos de las personas aludidas en el artículo 11 a las que se hubiera aplicado la normativa extraterritorial estadounidense, interesa a los efectos de esta nota fundamentalmente la prevista en su artículo 4, según el cual «las resoluciones de juzgados o tribunales y las decisiones de autoridades administrativas ubicados fuera de la Comunidad que hagan efectivos, directa o indirectamente, los textos legislativos que se enumeran en el anexo o las acciones basadas en ellos o derivadas de ellos, no serán reconocidas ni podrán ser cumplidas en modo alguno». Junto con ella, la medida prevista en el artículo 6 —a la que se hará una breve referencia— establece el derecho a la compensación a favor de las personas señaladas en el artículo 11 por cualquier daño que se les cause al amparo de la aplicación de los textos legislativos del anexo o de acciones basadas en ellos o derivadas de ellos.

2.1. La prohibición de ejecución

La perspectiva desde la que se analiza esta cuestión es la de la eficacia en España de una sentencia de un tribunal de los Estados Unidos que impone una sanción a una sociedad domiciliada en la Unión Europea o fuera de ella, pero ejecutable sobre bienes en España. En el segundo caso, será necesario que la sanción a la sociedad del grupo pueda entenderse que afecta a los intereses económicos de la sociedad domiciliada en la Unión Europea para que resulte de aplicación el reglamento. No obstante, como se ha señalado, cabría entender que, incluso si no es ésa la lectura adecuada del artículo 11 del reglamento, la ley española se opondría a la ejecución por razones de orden público, tal como se analiza a continuación.

Puesto que entre España y los Estados Unidos no existe ningún convenio internacional relativo al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, el texto de aplicación es la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJI), que exige para la ejecución de una resolución extranjera en España el correspondiente *exequatur*. De acuerdo con el artículo 41 de dicho texto legal, «[s]erán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España de conformidad con las disposiciones de este título las resoluciones extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso», entendiéndose por tales aquellas resoluciones que no son susceptibles de recurso ordinario en el Estado de origen. Es decir, para instar el *exequatur* en España será necesario que se hayan agotado las vías de recurso en el país de origen o que hayan transcurrido los plazos correspondientes sin que aquéllos se hubieran interpuesto.

Por lo que se refiere a las medidas provisionales o cautelares que pudiera adoptar el juez de los Estados Unidos y que se pretendiera ejecutar en España, el apartado 4 del mismo artículo prevé que «sólo serán susceptibles de reconocimiento y ejecución las medidas cautelares y provisionales, cuando su denegación suponga una vulneración de la tutela judicial efectiva, y siempre que se hubieran adoptado previa audiencia de la parte contraria». A la vista de lo que se expone a continuación, no parece que tal ejecución pudiera prosperar.

De instarse en España el *exequatur*, en las condiciones señaladas, de una sentencia estadounidense condenatoria en el contexto de la Ley Helms Burton, aquel frente al que se pretende puede oponerse a él por cualquiera de los motivos previstos en el artículo 46 de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. El apartado 1 de este artículo reza así:

Las resoluciones judiciales extranjeras firmes no se reconocerán:

- a) Cuando fueran contrarias al *orden público*.
- b) Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado

en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.

- c) Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia respecto a la cual fueren exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, *si la competencia del juez de origen no obedeciere a una conexión razonable*. Se presumirá la existencia de una conexión razonable con el litigio cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislación española.
- d) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España.
- e) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado, cuando esta última resolución reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en España.
- f) Cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero.

En el contexto de esta nota resultan especialmente relevantes los motivos *a* y *c*, sin perjuicio de la posibilidad de alegar cualquiera de los demás, si procediera. Respecto del primero de ellos, cabría incluir en él la prohibición de ejecución recogida en el artículo 4 del reglamento, puesto que se trata de una norma internacionalmente imperativa. Ese único argumento sería suficiente para justificar la denegación del *exequatur* con base en el orden público, integrando en él las razones que justifican la adopción del reglamento, pero se puede ahondar más (con un razonamiento que serviría también para negar la ejecución frente a situaciones que pudieran no resultar claramente cubiertas por el reglamento) alegando motivos basados en el Derecho internacional público: las expropiaciones o nacionalizaciones llevadas a cabo por Estados extranjeros no pueden ser cuestionadas ante los tribunales de otros Estados en cuanto actos que emanan de la soberanía estatal, pudiendo únicamente ponerse en cuestión la adecuación de los justiprecios pagados, en su caso. Siendo así, no cabe que los Estados Unidos ponga en cuestión tales expropiaciones o nacionalizaciones y se niegue a reconocerlas y, mucho menos, que trate de trasladar los efectos de esa falta de reconocimiento —para la que no está facultado— a particulares —personas físicas o jurídicas— que pueden haber adquirido con posterioridad derechos sobre los bienes en cuestión.

Por lo que se refiere al motivo de denegación basado en el criterio sobre el que el juez de origen ha fundado su competencia, no cabría considerar «conexión razonable» —desde la perspectiva española— aquella que se basa en que se trata del

tribunal del Estado del domicilio del demandante, sin que el supuesto planteado presente más vínculos con el Estado en cuestión. De este modo, si la demanda en los Estados Unidos se interpone frente a una sociedad española o frente a una sociedad del grupo de la española no domiciliada en los Estados Unidos y el único vínculo con aquel país es la nacionalidad o la residencia en su territorio del demandante, cabría oponer el motivo previsto en el artículo 46c de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil para negarse a reconocer o ejecutar la sentencia.

Junto con lo señalado, y sin necesidad de esperar a que se inste el *exequatur* de la sentencia estadounidense en España, es también posible que, una vez dictada aquélla, sea el demandado quien incoe en España un procedimiento destinado a obtener la declaración de no ejecutividad (una especie de «*exequatur* negativo»), de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.2 de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil («El mismo procedimiento se podrá utilizar para declarar que una resolución extranjera no es susceptible de reconocimiento en España por incurrir en alguna de las causas de denegación previstas en el artículo 46»).

2.2. La compensación

El artículo 6 del reglamento recoge la posibilidad de que las personas indicadas en el artículo 11 que se dediquen al comercio internacional o al movimiento de capitales y vayan a emprender actividades comerciales afines entre la Comunidad y terceros países (art. 1) obtengan una compensación por cualquier daño —incluidas las costas procesales— que se les cause al amparo de la aplicación de los textos legislativos que se enumeran en el anexo (entre ellos, la ley que aquí nos ocupa) o de acciones basadas en ellos o derivadas de ellos.

Dicha compensación podrá reclamarse a la persona física o jurídica —o a cualquier otra entidad— que haya causado los daños o a cualquier persona que actúe en su nombre o como intermediario. El precepto prevé asimismo que «[s]in perjuicio de otros medios utilizables y de conformidad con la legislación aplicable, la compensación podrá revestir la forma de incautación y venta de activos en poder de esas personas, entidades, personas que actúen en su nombre o intermediarios dentro de la Comunidad, incluidas las acciones que posean en una persona jurídica constituida en sociedad en la Comunidad».

Las situaciones que se plantean son intraeuropeas, es decir, aquellas en las que la reclamación de compensación se dirige a demandados domiciliados en la Unión Europea, de ahí la referencia que el precepto hace a los criterios competenciales previstos en el Convenio de Bruselas, en vigor a la fecha de adopción del reglamento y que ahora habría que entender referidos al Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis).